

Zapatero busca 'pasar página' en sus desacuerdos con el Partido Popular

El PSOE no descarta pactos estables con los nacionalistas, pero esperará a que resuelvan sus debates internos

PAULA DE LAS HERAS COLPISA. MADRID

José Luis Rodríguez Zapatero quiere pasar página. El presidente del Gobierno en funciones aprovechará su discurso de investidura para intentar limar asperezas con el PP. La situación de inestabilidad económica ha persuadido a los socialistas de que deben hacer cuanto esté en su mano por ofrecer estabilidad institucional. Y, vistas las dificultades para alcanzar un acuerdo que garantice la gobernabilidad del Estado desde el primer día de la legislatura, buscan ahora el entendimiento sobre aquellas cuestiones que sirvieron a los populares durante cuatro años para construir su política de oposición: la lucha antiterrorista, el desarrollo de los estatutos de segunda generación y la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

No habrá, según admitió hoy el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, propuestas concretas en estos terrenos. Sobre todo, en el del combate a ETA. Zapatero sostiene que aún es pronto para volver a intentar un acuerdo por escrito, pero en su primera intervención en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de marzo volverá a apelar al sufrimiento compartido por los dos partidos mayoritarios para reclamar que se olvide el pasado más cercano y se vuelva al consenso antiterrorista. «Sabido matizó Blanco que no hay ninguna posibilidad de diálogo con la banda terrorista».

Esta afirmación tropieza con la resolución aprobada en 2005 por todos los partidos salvo el PP y a través de la cual el Congreso dio su plázet al Gobierno para abrir un diálogo con la organización

terrorista. Blanco alegó que el texto quedó derogado *de facto* una vez disueltas las Cortes, pero este argumento que tiene difícil cabida en el ordenamiento español. En cualquier caso, insistió en que las recetas que pretende aplicar el Ejecutivo tienen poco que ver con las de la legislatura anterior porque, dijo, se ha abierto un «nuevo tiempo» que «viene marcado por las decisiones de ETA» y la ruptura del alto del fuego.

Zapatero hará hincapié, según fuentes gubernamentales, en la fortaleza del Estado de Derecho en un sentido amplio. Eso incluye su promesa de que el Gobierno defenderá la igualdad entre territorios. La idea no aparecía en el borrador inicial pero es una sugerencia que el jefe del Ejecutivo recibió este lunes en la reunión de la ejecutiva del PSOE. «Se trata -dice un miembro de la dirección socialista- de contrarrestar las exigencias de los catalanes (PSC incluido) de que se publiquen las balanzas fiscales». Es decir, que se explicita la diferencia entre lo que cada comunidad recibe del Estado y lo que aporta.

Programa propio

Otros dos ejes fundamentales de la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno serán la economía y los retos del futuro, con especial atención a la lucha contra el cambio climático, la investigación y el desarrollo. La vicepresidenta primera anunció hace una semana alguna sorpresa pero, en líneas generales, Zapatero echará mano de todas sus promesas electorales -la devolución de los 400 euros en la retención del IRPF, las ayudas para la renegociación de hipotecas a las familias más necesitadas, la aceleración en la contratación de obra públi-



'NÚMERO DOS'. José Blanco, ayer, en la sede del PSOE. / EFE

ca y los acuerdos sociales- así como del programa con el que se presentó a los comicios generales.

La idea de utilizar el programa electoral como base casi única del proyecto de gobierno responde a una estrategia y también a una necesidad. Los socialistas han pretendido hacer de la necesidad virtud y tratarán de explicar la elección de Zapatero en segunda vuelta (sólo Leopoldo Calvo Sotelo lo ha sido hasta ahora) como un ejercicio de autonomía política frente a los nacionalismos. Lo cierto,

según admiten fuentes del partido, es que la coyuntura interna por la que atraviesan los posibles socios -desde CiU hasta el PNV, pasando por IU- hacía difícil otra cosa. Y que buscarán el entendimiento un poco más adelante.

Blanco insistió así en que el PSOE ha dejado la puerta abierta a «formas estables de colaboración». Pero, antes de que lleguen, quizá tenga que haber elecciones en el País Vasco y en Cataluña. Mientras, los socialistas tratarán de sacar partido al nuevo reparto

Blanco siembra dudas sobre su continuidad

COLPISA MADRID

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, no termina de deshojar la margarita. Después de haber afirmado en múltiples ocasiones que hace tiempo que planea su retirada, el número dos de los socialistas ofreció ayer una fecha orientativa para su marcha: el Congreso que el partido celebrará el 4, 5 y 6 de julio. «Siempre existe la posibilidad de que a uno le puedan sustituir -dijo- y es comprensible que uno tenga otros objetivos más allá de ser secretario de Organización porque ocho años son muchos años».

Blanco asegura que no se irá a un ministerio y sus reflexiones públicas apuntan hacia el sector privado. Sin embargo, son muchos en el partido quienes dudan de que finalmente dé el paso y abandone. Sobre todo, después de haber conseguido aglutinar más poder que ninguno de sus antecesores en el cargo. Blanco controla, además de la Organización, la formación, las finanzas del partido y la coordinación electoral y, tras las elecciones, Zapatero le encomendó la tarea de *embajador plenipotenciario* ante los grupos del Congreso.

Suya ha sido la estrategia de negociación para la composición de las Mesas del Congreso y el Senado y para la investidura de Zapatero. El presidente del Gobierno se lo ha puesto fácil, porque -según fuentes socialistas- en ningún momento planteó la exigencia de ser elegido en primera vuelta.

de cartas en el primer partido de la oposición. Saben que la inercia *antipepé* no es tan potente ahora como en 2004 y que el grupo parlamentario dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría no será el de Eduardo Zaplana.

El CGPJ expedienta por una falta muy grave de desatención al juez del caso de Mari Luz Cortés

A. TORICES COLPISA. MADRID

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) animó ayer al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía a que también depuren las responsabilidades en que habría incurrido alguno de sus funcionarios en el escándalo judicial desatado por el caso de Mari Luz Cortés.

Ese fue uno de los acuerdos adoptados ayer por la Comisión Disciplinaria que, por unanimidad, decidió abrir un expediente por falta muy grave de desatención contra Rafael Tirado, el magistrado sevillano que tardó

más de dos años en ejecutar la sentencia que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense, que murió en enero pasado.

Del Valle tendría que haber ingresado en prisión en la primavera de 2006 para cumplir una condena de más de tres años de cárcel por abusar de su propia hija, pero, según el informe de la Inspección, el escaso control que ejercía el juez sobre el trabajo de sus subordinados en el Juzgado Penal 1 de Sevilla y los errores cometidos por la secretaria y alguno de los funciona-

rios permitieron que el delincuente sexual siguiese en libertad en el momento del crimen.

El expediente contra Tirado, cuya instrucción durará entre dos y cuatro meses, puede acarrear al juez sanciones que van desde el traslado forzoso -a más de 100 kilómetros- y la suspensión -por un máximo de tres años- a la expulsión de la carrera judicial si el pleno del CGPJ considera que la falta es muy grave. Ninguno de los miembros de la Comisión Disciplinaria creyó necesario acordar la suspensión cautelar del juez en sus funciones mientras se instruye el expediente.

La oposición logra que el Ayuntamiento de Hernani condene las amenazas de ETA

EFE SAN SEBASTIÁN

Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Hernani (Gipuzkoa), PSE/EE, PNV, EA, EB y PP, unieron ayer sus votos para aprobar una moción de condena del último comunicado de ETA, en el que la organización terrorista amenaza a los militantes socialistas.

Según informó el PSE/EE en un comunicado, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Hernani, municipio que gobierna ANV en minoría, ha aprobado una moción en la que ha mostrado su «solidaridad y cariño con la militancia socialista, así como con todos los ciudadanos y colectivos amenazados».

Además de exigir la disolución de ETA, los grupos de la oposición se han comprometido a «liderar y gobernar las instituciones desde los principios del respeto a las ideas y a la defensa de las mismas mediante la palabra y los mecanismos democráticos».

El texto expresa el «máximo rechazo» al comunicado en el que ETA asumió la autoría del asesinato del ex concejal socialista en Arrasate Isaías Carrasco, con el que la organización terrorista «llevó a la práctica la amenaza que ya en verano realizó a la militancia socialista» y que ha vuelto a expresar en su último pronunciamiento público. ANV presentó una moción alternativa, que sólo fue apoyada por este grupo.